



RESOLUCIÓN DE LA SOLICITUD DE INFORMACIÓN NÚMERO 001-072236

Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.

1º Con fecha 16 de septiembre de 2022 tuvo entrada en la Unidad de Transparencia del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital una solicitud de acceso a la información pública al amparo de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, formulada por [REDACTED] y registrada con el número de expediente 001-072236 cuyo contenido es el siguiente:

1/Quisiera tener información por favor de todas las autorizaciones hechas por el Tesoro, a través de la Subdirección General de Inspección y Control de Movimientos de Capitales, para la liberación de determinados fondos o recursos económicos, congelados o bloqueados relacionados con sujetos sancionados cuyas embarcaciones han sido inmovilizadas en España desde febrero de 2022 en la relación con la guerra en Ucrania. En concreto, quisiera saber el número total de autorizaciones hechas y tener información de cada una de las autorizaciones, en qué fecha, por qué importe, con qué fin, a qué barco y a qué persona en concreto.

2/Al margen de la anterior solicitud, quisiera por favor tener información de cada uno de los pagos autorizados por el Tesoro este año, en qué fecha, por qué importe, con qué fin y a qué persona en concreto de las siguientes embarcaciones inmovilizadas en España: Valerie, Crescent, Tango y Lady Anastasia.

3/Quisiera saber por favor cuántas embarcaciones han sido inmovilizadas en España desde febrero de 2022 en la relación con la guerra en Ucrania, cuál es el nombre de dichas embarcaciones, en qué lugar y fecha fueron inmovilizados, y el nombre del propietario de dichas embarcaciones.

4/Quisiera saber por favor el nombre del propietario de las siguientes embarcaciones inmovilizadas en España: Valerie, Crescent, Tango y Lady Anastasia.

5/Quisiera saber por favor si las embarcaciones Valerie, Crescent, Tango y Lady Anastasia han efectuado pagos a los astilleros y/o puertos en los que están amarrados desde el momento en que estas embarcaciones fueron inmovilizadas este año. Por favor, detallar los pagos efectuados o no efectuados, las fechas de cada pago, el valor y el destinatario.

6/Quisiera tener información por favor de todas las autorizaciones hechas por el Tesoro para la liberación de determinados fondos o recursos económicos, congelados o bloqueados relacionados con propiedades inmobiliarias en España de sujetos sancionados cuyas propiedades han sido declaradas con una prohibición de disponer porque el propietario/a de la finca está



incluida en las listas de sancionados que se incluyen en los Reglamentos -UE- del Consejo relativos a medidas restrictivas motivadas por acciones de Rusia que desestabilizan la situación en Ucrania. En

concreto, quisiera tener información de cada uno de los pagos autorizados, en qué fecha, por qué importe, con qué fin, a qué finca (incluida su dirección postal) y a qué persona en concreto.

7/Quisiera tener información por favor de todas las propiedades inmobiliarias en España cuya titular es [REDACTED] que han sido declaradas con una prohibición de disponer como consecuencia de que [REDACTED] está incluida en las listas de sancionados que se incluyen en los Reglamentos -UE- del Consejo relativos a medidas restrictivas motivadas por acciones de Rusia que desestabilizan la situación en Ucrania. Quisiera saber la dirección exacta de todas esas propiedades, la fecha en que fueron declaradas con una prohibición de disponer, la fecha en que [REDACTED] se convirtió en titular de cada una de esas fincas y el nombre de la persona que le vendió cada una de esas fincas.

2º El 19 de septiembre de 2022 se dio traslado de esta solicitud a la Secretaría General del Tesoro y Financiación Internacional, fecha a partir del cual comienza a contar el plazo de un mes previsto en el artículo 20.1 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, para su resolución.

3º Una vez analizada la solicitud, esta Secretaría General resuelve no dar acceso a la solicitud de información en base al artículo 14 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, que establece:

“1. El derecho de acceso podrá ser limitado cuando acceder a la información suponga un perjuicio para:

- a) La seguridad nacional.*
- b) La defensa.*
- c) Las relaciones exteriores.*
- d) La seguridad pública.*
- e) La prevención, investigación y sanción de los ilícitos penales, administrativos o disciplinarios.*
- f) La igualdad de las partes en los procesos judiciales y la tutela judicial efectiva.*
- g) Las funciones administrativas de vigilancia, inspección y control.*
- h) Los intereses económicos y comerciales.*
- i) La política económica y monetaria.*
- j) El secreto profesional y la propiedad intelectual e industrial.*
- k) La garantía de la confidencialidad o el secreto requerido en procesos de toma de decisión.*
- l) La protección del medio ambiente.”*



En este caso, en la solicitud recibida se piden datos de los que el Estado español tiene constancia en base a lo establecido en el Reglamento (UE) nº 269/2014 del Consejo, de 17 de marzo de 2014, relativo a la adopción de medidas restrictivas respecto de acciones que menoscaban o amenazan la integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania.

En su artículo 8.4, el Reglamento (UE) 269/2014 del Consejo, establece que:

*Todo tratamiento de datos personales se realizará de conformidad con el presente Reglamento y los Reglamentos (UE) 2016/679 y (UE) 2018/172 del Parlamento Europeo y del Consejo y **únicamente en la medida en que sea necesario para la aplicación del presente Reglamento** y para garantizar una cooperación eficaz entre los Estados miembros y con la Comisión en la aplicación del presente Reglamento.*

La publicación de esta información supone un tratamiento no permitido, en tanto la habilitación legal para el tratamiento de datos personales solo está habilitado únicamente en la medida en que sea necesario para la aplicación del presente Reglamento.

Por ello, y de acuerdo con el punto 3 del artículo 8, se considera que proporcionar el acceso a la información solicitada supondría faltar a las obligaciones recogidas en un Reglamento de obligado cumplimiento. Además, podría afectar negativamente a:

- La prevención, investigación y sanción de los ilícitos penales, administrativos o disciplinarios.
- Las funciones administrativas de vigilancia, inspección y control.

Los artículos 51.2 y 52.4 de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención de blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo prevén como infracción muy grave, o grave según las circunstancias, las siguientes:

a) El incumplimiento doloso de la obligación de congelar o bloquear los fondos, activos financieros o recursos económicos de personas físicas o jurídicas, entidades o grupos designados.

b) El incumplimiento doloso de la prohibición de poner fondos, activos financieros o recursos económicos a disposición de personas físicas o jurídicas, entidades o grupos designados.

El acceso a esta información puede comprometer la investigación sobre la comisión de un ilícito administrativo, en caso de hacerse público el nivel de diligencia de todos sujeto obligado a la hora de congelar activos económicos, o ponerlos a disposición de sujetos sancionados.



En segundo lugar, porque la concesión del derecho de acceso podría otorgar información acerca de las entidades que puedan, o no, estar cumpliendo con la normativa vigente, y podría afectar a las funciones de supervisión y control realizadas por el Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales, en ejercicio de las competencias que al respecto tiene atribuidas por el artículo 42.3 de la Ley 10/2010, de 28 de abril a la hora de detectar e inspeccionar el grado de cumplimiento con las obligaciones previstas en los Reglamentos comunitarios, que recaen sobre todas las personas físicas o jurídicas.

Por todo lo comentado más arriba, debe procederse a la denegación de acceso a la información solicitada por [REDACTED]

4º Si bien, en lo relativo al último punto de la solicitud (punto 7/), cabe comunicar que el momento en el que [REDACTED] se convirtió en titular de estas y el nombre del vendedor, corresponde a información no disponible en este centro directivo, debiendo atender dicha solicitud ante los registradores competentes, en cada caso.

Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Ley 39/2015, de 11 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, y Ley 29/ 1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa), en el plazo de dos meses o, previa y potestativamente, reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno en el plazo de un mes; en ambos casos, el plazo se contará desde el día siguiente al de la notificación de la presente resolución.

Firmado electrónicamente por:

EL DIRECTOR GENERAL DEL TESORO Y POLÍTICA FINANCIERA

Álvaro López Barceló